



Alternativas para el desarrollo

el debate está en la mesa



Alternativas para el desarrollo
el debate está en la mesa

© 2007, INESC

Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC) Alternativas para el Desarrollo: el debate está en la mesa.

_Brasilia, 2007

36 p.:il

inlucui referências bibliográficas

1. Brasil, políticas públicas. 2. Brasil, política y gobierno. I Título.

COORDINACIÓN EDITORIAL

Luciana Costa

REDACCIÓN

Iracema Dantas

PRODUCCIÓN

Jair Barbosa Jr.

PROYECTO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN

Guto Miranda

FOTOGRAFÍA (GENTILMENTE CEDIDA)

Agência Brasil - Radiobrás

Marcus Vini

COLEGIADO DE GESTIÓN

Atila Roque

Iara Pietricovsky

José Antônio Moroni

CONSEJO DIRECTOR

Armando Raggio

Caetano Araújo

Fernando Paulino

Guacira César

Jean Pierre Leroy

Jurema Werneck

Luiz Gonzaga de Araújo

Neide Castanha

Pastor Ervino Schmidt

EQUIPO

Alessandra Cardoso

Alexandre Ciconello

Ana Paula Felipe

Edélcio Vigna

Eliana Graça

Jair Barbosa Jr.

Luciana Costa

Lucídio Bicalho

Ricardo Verdum

INSTITUCIONES QUE APOYAN AL INESC

ActionAid; Charles Stewart Mott Foundation; Christian Aid; EED; Fastenopfer; Fundação Avina; Fundação Ford; Instituto Heinrich Böll; KNH; Norwegian Church Aid; Oxfam Novib Oxfam GB.

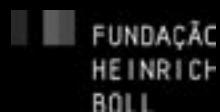
Está permitida su reproducción, siempre y cuando se cite la fuente.

Realización

Apoyo



FORD FOUNDATION



Índice

Alternativas para el desarrollo: el debate está en la mesa	4
1 – Modelo de desarrollo	7
2 – Participación y control social	10
3 – Derechos humanos y desigualdades	14
4 – Política Internacional	26



FOTOS MARCUS VINI



4

Alternativas para el desarrollo: el debate está en la mesa

Desde su creación en 1979, el Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC) viene actuando en diversas iniciativas que buscan profundizar el ejercicio de la democracia brasileña. Actualmente, todos los proyectos del Instituto abordan dos líneas de acción principales: el fortalecimiento de la sociedad civil y la ampliación de la participación social en espacios de debate y discusión de políticas públicas. En la lucha de las ideas y del debate público -sea por a través de publicaciones o intervenciones de carácter social- el instrumental presupuestal es la primera piedra del fortalecimiento y de la promoción de la ciudadanía.

Si bien la discusión de la economía, las partidas presupuestarias y el monitoreo de las inversiones públicas bajo una óptica social no es una acción nueva en el trabajo del INESC, a lo largo de su vida institucional es posible identificar que su apuesta por un modelo de desarrollo que garantice al Brasil oportunidades de crecimiento sostenible, fue siempre su principal estrategia, aún cuando dicha preocupación estuviera distribuida en diferentes proyectos e iniciativas. Sin embargo, más recientemente, desde 2003, exactamente, cuando el país renovó sus esperanzas por un gobierno que parecía demostrar tener la fuerza suficiente para lograr cambios estructurales, el INESC supo reunir -en diferentes momentos, en el marco de seminarios, talleres de trabajo y discusión y estudios más profundos con otras organizaciones- todo su bagaje de debates sobre cómo revertir la lógica del “crecer para después distribuir”.

Fue en ese sentido, y con la finalidad de ampliar el impacto de sus acciones en este debate, que el INESC promovió el Seminario “Pensando en una Agenda para el Brasil: Desafíos y Perspectivas”, evento concebido tomando en cuenta el objetivo de dar pie a una discusión y generar insumos sobre

modelos alternativos de desarrollo que representen una opción diferente al modelo neoliberal, actualmente hegemónico. Un modelo que, cada vez más, privilegia lo económico perjudicando lo social.

La metodología del encuentro realizado en Brasilia, los días 26 y 27 de junio de 2007, se planteó con la conformación de cuatro grupos: i) modelos de desarrollo; ii) participación y control social; iii) derechos humanos y desigualdades; y, iv) política internacional. Dicho evento contó con la participación de estudiosos y representantes de organizaciones de la sociedad civil organizada, con reconocida trayectoria en acciones vinculadas al debate en cuestión¹.

El INESC quiere también combatir la falsa idea de que no existen propuestas factibles para la aplicación de otro modelo de desarrollo. Publicaciones, encuentros ya realizados y otros que se llevarán a cabo en breve, son herramientas que ayudan a ampliar e incluir otras voces en el debate, pero que no deben ser vistos simplemente como nuevos medios de formular modelos; no se trata solamente de sustituir un modelo por otro. El INESC -juntamente con sus organizaciones y redes aliadas- quiere fomentar la creación de cuantos modelos como sean necesarios para que el país crezca, garantizando su sostenibilidad económica, pero también -y principalmente- su sostenibilidad social.

A continuación se resaltan algunas de las alternativas que fueron presentadas en el seminario y fueron reunidas en una publicación² organizada por Atila Roque y Luciana Costa. Dicha publicación es de lectura obligatoria para quien quiere conocer algo más de lo que ya es común en la prensa, es decir, los tonos que el debate sobre el desarrollo viene adquiriendo en los diferentes espacios de la sociedad brasileña. Al proporcionar una herramienta para la ampliación del debate, el INESC quiere, también, que la sociedad se sienta realmente comprometida y sepa “lo que puede cambiar en la vida real”. Para ello, el Instituto quiere escuchar nuevas voces y traer para este debate a los sectores que siempre estuvieron al margen de espacios reales de decisión sobre las políticas públicas.

¹ Los expositores fueron: João Sicsú, de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ); Célia Lessa, de la Universidad Federal Fluminense (UFF); Lucia Avelar, de la Universidad de Brasilia (UnB); Chico de Oliveira, de la Universidad de São Paulo (USP); Sueli Carneiro, de la ONG Geledés; Sílvia Ramos, del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad Cândido Mendes (CESeC/Ucam); Paulo Carbonari, del Movimiento Nacional de Derechos Humanos (MNDH); Maria Regina Soares, del Instituto Universitario de Investigaciones de Río de Janeiro (Iuperj); y, Adhemar Mineiro, de la Red Brasileña para la Integración de los Pueblos (Rebrip). Por el INESC estuvieron presentes, como moderadores(as), Eliana Magalhães, José Antônio Moroni, Atila Roque e Iara Pietricovsky de Oliveira.

² El Libro lleva el mismo título que el Seminario y recopila las partes más importantes de las discusiones realizadas en el encuentro. Dicha publicación será lanzada a inicios del año próximo, y estará disponible en el site del INESC: www.inesc.org.br

Para situar la historia

Fue luego después del inicio del primer gobierno del Presidente Lula, en 2003, que el modelo neoliberal de desarrollo pasó a ser discutido de forma menos tímida por la sociedad brasileña. Con la esperanza de cambios reales en la economía nacional, que venía de un largo periodo de aplicación de políticas (1994–1998/ 1999–2002)³, instituciones como el INESC⁴ y otras más, comenzaban a preparar papers, reuniones y debates sobre este asunto. Si antes las discusiones se restringían a algunas organizaciones y entornos académicos, no se puede negar que el ascenso del Partido de los Trabajadores al Gobierno Federal –aún cuando estaba conformado por diferentes matices políticos– fomentó nuevas ideas. Las características y los problemas del modelo de desarrollo que venían orientando las políticas económicas y sociales del Gobierno brasileño en los últimos años, por fin, podrían ser modificadas. ¿Pero, cuáles serían las alternativas? ¿Sería que el cambio del modelo económico es en realidad capaz de “incluir”

y combatir las desigualdades? ¿Un país con características tan diferenciadas puede utilizar “un único modelo”? ¿Será que la lógica no sería justamente la de no seguir modelos prefabricados?

En el debate público, la estabilidad económica y financiera era colocada como la mayor ganancia de la economía brasileña. Para la población en general, nada que pudiera representar la amenaza de la vuelta de inflación podría ser imaginado. Es más, durante su campaña, el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva siempre enfatizó que mantendría los índices de inflación bajo control. Aún cuando las cuestiones estén realmente ligadas, lo que se vio colocado en la opinión pública en general era que no había nada diferente que se podría hacer. Es decir: se vendió la idea de que aún con la llegada del Partido de los Trabajadores al Gobierno Federal, nada podría ser modificado en las reglas económicas, bajo la amenaza de que el monstruo de la inflación se tragara los salarios sagrados de aquellos que todavía encontraban empleo formal.

1 - MODELO DE DESARROLLO

Durante el primero mandato de la administración Lula (2003-2006), lo que se vio fue la repetición de un recetario bastante conocido: una política monetaria de elevadas tasa de interés y la apertura financiera de la economía financiera (iniciada en la década de 1990, por otros gobiernos). Para el economista João Sicsú, Profesor del Instituto de Economía de la Universidad del Estado de Río

³ Mandatos del Presidente Fernando Henrique Cardoso, del PSDB-SP.

⁴ El Instituto de Estudios Socioeconómicos, por ejemplo, produjo la publicación: “O Inesc e a agenda brasileira 2003/2006”. Brasília, 2003.

de Janeiro (UERJ), a pesar que la elevada tasa de interés tenga una visibilidad mayor dentro del debate público, es la apertura financiera la que ha generado el mayor daño a la economía brasileña. Según Sicsú “cada vez más, la tasa de cambio está sometida al humor y a las expectativas de las grandes instituciones financieras internacionales y nacionales”.

Entre las varias medidas adoptadas para ampliar esta apertura de la economía brasileña, dos de ellas deber ser resaltadas. La primera fue la liberación -para los extranjeros- del pago de impuestos sobre rentas obtenidas a través de la adquisición de títulos públicos, lo que según los especialistas aumenta el interés por los títulos públicos federales, trae capitales extranjeros para el país, y valoriza la tasa de cambio. La segunda medida fue el término de la cobertura cambiaria integral sobre las exportaciones. Con ello, el empresario exportador puede dejar hasta el 30% de la recaudación de sus ventas aplicadas en el exterior.

Las consecuencias de dichas medidas podrán ser percibidas en el momento en que haya una fuga de capitales para el exterior, cuyos efectos son conocidos: desvalorización cambiaria abrupta; inflación; incremento de la tasa de interés; recorte de los gastos públicos; y, el pedido de auxilio bajo las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es justamente para ello que João Sicsú apunta: “Si cuando los financista retiran sus recursos del país, ¿por qué el empresariado exportador haría lo contrario? Es decir: no hay dudas de que el empresariado exportador ejercerá su derecho de mantener el 30% de las recaudaciones de sus ventas fuera del Brasil.

1.2 - *Dos corrientes*

De acuerdo con Sicsú, es imposible no ver que existe dentro del gobierno Lula (fruto de tantas coaliciones políticas) una disputa por dos modelos económico-sociales: de un lado, un modelo desarrollista y de distribución; y, del otro lado, un modelo de estancamiento-concentrador⁵. Es imposible, también, no percibir que el segundo modelo es el reinante. Sus “verdades” se transforman en pautas en diferentes medios de comunicación y son repetidas también en las universidades, en los cursos de maestría y post-graduación, ejerciendo una influencia en diversos frentes, sea en el ámbito intelectual o en el modo de pensar de las personas comunes o poco informadas. Sus ideas son repetidas de forma incesante, hasta que sean transformadas en pensamientos. En las palabras de João Sicsú “Es un movimiento tan fuerte que hace que gran parte de los trabajadores y trabajadoras se sienta culpable por su desempleo, ya que no fue capaz de calificarse. Este movimiento también logra que muchas personas creen que para acabar

⁵ Modelo conformado por dos vertientes: (i): aquella que actúa en el sistema financiero, cuyos actores son el Banco Central del Brasil y las instituciones financieras nacionales e internacionales; y ii) aquella que actúa en la economía real, cuyos actores son las empresas agro-minerales exportadoras.

con la pobreza bastaría esterilizar a las mujeres pobres. Dificultar la procreación de las personas pobres sería la solución, y no -como es lo correcto- construir mecanismos que propicien el incremento y la estabilidad de la renta y el social”.

Por su parte, el modelo desarrollista y de distribución busca estimular, tanto el mercado interno como las exportaciones de productos manufacturados, universalizando el acceso a los bienes de consumo por parte de la sociedad brasileña. La apuesta es que este crecimiento apoyado en la industrialización -que posibilita la formalización de las relaciones laborales; el aumento de la recaudación de impuestos; general empleos más calificados y con remuneraciones más elevadas; desarrollo tecnológico y la necesidad de innovación- sea el único camino para la reducción de las desigualdades y la elevación de la renta del trabajo.

Se la gran duda no es está en qué modelo sería capaz de garantizar una mayor inclusión social, lo que existe es la falta de claridad en las opciones tomadas por el Presidente Lula y sus colaboradores más cercanos. El Gobierno mantiene desarrollistas en puestos claves de la administración pública; pero sin embargo, mantiene también a los partidarios del modelo de estancamiento, en otros de similar importancia. El Gobierno presenta un programa de aceleración del crecimiento desarrollista, también mantiene una política de estancamiento de intereses elevados, una tasa de cambio altamente valorizada y gastos sociales limitados.

Protección social

El proyecto desarrollista y de distribución busca establecer una ruta de crecimiento económico para tasas elevadas y continuas, en condiciones de manejo ambiental adecuado y la profundización del desarrollo social. Por desarrollo social se debe entender: i) empleo pleno; ii) la universalización del salario formal; iii) la protección social para los ciudadanos, incluyendo a los niños, las amas de casa,

los estudiantes sin empleo o con empleo formal o informal, urbano o rural, los jubilados, los inválidos, los portadores de necesidades específicas, entre otros.

La protección social incluye el acceso irrestricto y de calidad a los sistemas formales de educación y de salud, así como a los beneficios de previdencia tradicionales, al seguro de desempleo y a los programas de asistencia social.

1.3 - Integración de políticas

Profesora de Economía de la Universidad Federal Fluminense (UFF), Célia Lessa, defiende la tesis de que un modelo de desarrollo precisa tener políticas sociales pensadas de forma articulada con las políticas económicas. En el encuentro promovido por el INESC en Brasilia, la citada investigadora resaltó la integración entre políticas activas de mercado de trabajo y las políticas de desempleo que existe en los países escandinavos. Según la Econ. Lessa, en dichos países la

reinserción de trabajadores y trabajadoras en el mercado de trabajo está en armonía con los programas de calificación y recalificación profesional y un generoso seguro de desempleo, con una alta tasa de reposición y larga duración. La profesora explica: “Las personas desempleadas se califican al recibir un seguro de desempleo y también al ingresar a programas públicos de entrenamiento de fuerza de trabajo”. Una gran diferencia es que la intervención pública no se limita a garantizar renta y calificación, sino también se hace presente en la coordinación del mercado de trabajo, uniendo la oferta y la demanda, a partir de la información sobre las necesidades de calificación por parte de potenciales empleadores.

Otro ejemplo en la misma región, es la política de ampliación de la tasa de participación femenina en el mercado de trabajo, acoplada a las políticas de care: guarderías públicas de tiempo integral con profesionales calificados y con asistencia pública para los ancianos. La expansión de estos servicios públicos proporcionó a las mujeres una mayor participación en el mercado de trabajo y también una mejoría en su calificación. La citada profesional también trae al debate el ejemplo de la expansión del empleo público en el sector de la prestación de bienestar social (care), como la educación, la salud, etc. Actualmente, cerca del 20% de los empleos en Suecia son públicos, y están localizados, principalmente, en la prestación de servicios relacionados con el bienestar social. Parte del sustento financiero del estado del bienestar proviene, por lo tanto, de los impuestos pagados por sus propios empleados.

Además de la integración entre políticas económicas y aquellas más directamente sociales, el modelo de desarrollo escogido podría también establecer balizamientos generales para la política macroeconómica en lo concerniente a los límites para la tasa de intereses, para la apreciación del cambio y para la tasa de inflación, que sean compatibles con objetivos de corto plazo para la reducción de la pobreza y las desigualdades.

2 - PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

Para el INESC no hay forma de como idear un modelo de desarrollo en el cual la participación y el control social no estén relacionados. En el Brasil no faltan mecanismos institucionales y procesos de participación y de control social. ¿Pero, de qué forma estas esferas están realmente sirviendo para ampliar la democracia participativa? ¿De qué forma están siendo eficaces en la elaboración, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas?

Lúcia Avelar, Directora del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Brasilia (UnB), es una investigadora más que ha participado en los debates promovidos por el INESC. Y es esta profesional quien ayuda a reflexionar sobre la efectividad del control social (o el control ciudadano). Los medios de comunicación representan un ejemplo muy interesante: “Los medios de comunicación están comprometidos en un país donde las elites tradicionales encuentran

instrumentos para su control, de modo que hay serias dudas respecto a su imparcialidad. ¿El derecho de opinión está, efectivamente asegurado? ¿Quién no conoce las dificultades que existieron para que se publicaran artículos con temas contrarios a las líneas editoriales y políticas de la mayoría de periódicos, revistas, emisoras de radio y televisión, entre otras? Mayor aún, si existe el derecho de asociación, una realidad que creció enormemente en el Brasil durante los últimos 40 o 50 años, ¿cuál es la visibilidad alcanzada por estos actores? Por el contrario, los movimientos sociales son mal vistos. El “poder popular” es considerado como oscuro, como un “vestigio del marxismo atrasado”; las ONG ganaron espacio cuando se tornaron foco de corrupción política de algunos gobiernos que, inadecuadamente, transfirieron recursos para sus grupos preferidos”.

2.1 - Falta control, sobra impunidad

En el Brasil, podemos afirmar que la clase política goza de total independencia en sus mandatos. No existe un efectivo castigo para los políticos, funcionarios, jueces y asesores corruptos. Aquellos que todavía reciben algún tipo de execración pública son los que no representan un grupo político realmente fuerte, generalmente “recién llegados”, y mantenidos como de otra casta. Con una movilidad social casi inexistente, el país se tornó en especialista en castigar a los “que no son parte de”. Lúcia Avelar resalta que una de las tareas del control social es la de garantizar la independencia de los tribunales en relación con la clase política, evitando los “acuerdos” entre la clase política y quien aplica la ley. Pero esa es aún una realidad lejana.

Una prueba de ello es el resultado de un estudio sobre la auditorías de municipios realizadas por la Contraloría General de la Unión (CGU), órgano del gobierno central para monitorear la aplicación de los recursos transferidos a los municipios con menos de 450 mil habitantes. Este estudio señala que la densidad de organización de la sociedad civil es inversamente proporcional con los índices de corrupción. En los municipios más pequeños y peores, con baja calidad de vida, con lideranzas políticas de clientelaje y baja densidad asociativa, el desvío de recursos públicos llega al 100% de los casos. En los municipios en los que el Presupuesto Participativo se convirtió en un instrumento real de control presupuestario, los avances han sido evidentes. Pero en la mayoría de ellos reina el clientelismo autoritario que, frecuentemente, resiste a las presiones de la sociedad organizada.

Sin embargo es en el Poder Judicial donde está la mayor insuficiencia del control social. De todos los poderes, es el que más rechaza al control externo y sus integrantes de creen parte de una estirpe real. La propia Orden de los Abogados del Brasil (OAB) rechaza el control externo. Y por más que se discuta la reforma del Poder Judicial, esto aún parece una meta muy lejana de lograr. Otro dato es que no existen representaciones en la sociedad civil con fuerza corporativa suficiente para su control. La única esperanza ha sido la presión ejercida por entidades internacionales de derechos humanos exigiendo acciones efectivas contra la violación de derechos; la corrupción; la violencia policial; las ejecuciones en presidios; en morros y en áreas rurales.

Estrategias para la sociedad civil

Los desafíos para tornar el control social realmente un instrumento de accountability son muchos e imprescindibles para un modelo de desarrollo que combata las históricas desigualdades brasileñas. ¿Existirán puntos clave en los cuales las organizaciones cívicas se deberían concentrar? ¿Podríamos pensar en estrategias prácticas de control ciudadano sobre las instituciones públicas para ellas respondan a las necesidades de sus respectivas poblaciones?

Algunos grupos organizados y ONG –entre las cuales se destaca el INESC– acompañan la ejecución presupuestaria en algunos municipios, contribuyendo para la democratización y en el aumento de la transparencia del poder público. Se acaba construyendo, pedagógicamente, la cultura de la accountability. Si existen grupos que iniciaron este trabajo, ¿por qué no divulgar sus acciones? ¿Por qué no trabajar con la repercusión de los buenos ejemplos?

Para Lúcia Avelar, no se trata de aplicar una receta, sino de tornar a la sociedad civil, en un grupo real y cívico. Señala varias cuestiones sobre las cuales las organizaciones sociales deberían reflexionar: “¿Cuán efectivo ha sido el control social sobre los presupuestos

municipales, estatales y federales, particularmente, en lo que se refiere a las inversiones sociales, como las políticas de educación y de salud? Ningún candidato a las elecciones deja de prometer dar prioridad a tales políticas. Pero, ¿cuál ha sido la prioridad real de las inversiones en esas áreas? ¿No es verdad que los respectivos ejecutivos continúan teniendo el monopolio de decisión sobre tales políticas? ¿Si los legislativos desempeñan un papel de influencia relativa, cómo ha sido tal relación?

Otra pregunta: ¿Por qué no reunir esfuerzos entre diferentes organizaciones para debatir los datos producidos en el campo de la implementación de las políticas públicas? ¿Y, por qué no establecer alianzas entre los grupos de la sociedad organizada, grupos de investigación y fundaciones interesados en evaluar lo que se ha hecho en las diferentes esferas de la administración pública?

Lúcia asegura que “el control ciudadano, construido en dicha dirección, puede proporcionar la más esencial de las tareas de exigencia, porque todas las inversiones ganarían más transparencia y, además de ello, sabríamos, por fin, cuales son las reales preferencias de los gobernantes y de la clase política”.

2.2 - Victoria del capitalismo

Chico de Oliveira, sociólogo y uno de los fundadores del PT, al imaginar una nueva agenda para el Brasil trae elementos históricos de las desigualdades nacionales y su relación con las políticas sociales. Uno de los más críticos pensadores del gobierno Lula –tanto, que se separó del PT aún durante el primer mandato– cuestiona: “¿Quién puede estar en contra de las políticas afirmativas, como cuotas para las personas de raza de negra en las universidades

o las políticas de Bolsa Familia, cuando es evidente que el sistema brasileño jamás podrá cumplir con aumentar los salarios reales que dejen de lado la necesidad de la caridad gubernamental y que las personas negras están casi impedidas de entrar en las universidades públicas?”

Como observador atento, Chico alerta: “hasta las entidades que nacieron como vocalizadores de lo que el sistema prohibía, ya que el léxico político no las alcanzaba, se están transformando en productoras de un consenso negativo en forma de institucionalización de las políticas sociales dichas afirmativas”. Además, según el sociólogo, en el Brasil, al igual que en África del Sur, el concepto etnia se confunde con el de clase, pero el combate a las diferencias étnicas no tiene eficacia. “Cuando la política se dirige por estatutos del biopoder, no se anula la pobreza de clase; simplemente se hace un nuevo recorte entre las personas negras y mulatas. La película “Infancia robada”, que ocurre en África del Sur, exactamente en Johannesburgo, muestra un secuestro realizado por una banda de pobres, negros, evidentemente, en una familia rica... ¡Negra! La discriminación no desapareció, simplemente cambió de clasificación: ahora -señala Chico- la clase la determina la jerarquía, ¡y ya no más el color de la piel!

En el Brasil, la discriminación de clases se presenta revestida por el preconceito de color y de región: ser nordestina, negra y mujer, es la suma teológica brasileña. Según estudios del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA), la acción del Programa Bolsa Familia⁶ generó una disminución de la desigualdad. Pero, de acuerdo con Chico de Oliveira, lo que esa disminución no dice es que se trata de una disminución en las remuneraciones del trabajo, y que las mismas son perjudicadas respecto de las rentas de capital en la distribución funcional de la renta. Resalta: “De qué disminución de la desigualdad se está hablando? Cualquier estadístico sabe que el decimal más alto está siempre abierto, porque solo es posible cerrarlo por criterios convencionales. En una sociedad tan desigual como la brasileña, el decimal superior abierto esconde cualquier posibilidad de medir la efectiva desigualdad. Esto es América Latina, Brasil incluida, puesto que se sabe en la actualidad, gracias a la revista Forbes (mortífera publicación gringa para alabar la ideología burguesa más rastrera), que el hombre más rico del mundo es un mexicano”.

⁶ Bolsa Familia es un programa de transferencia directa de renta que presenta algunas condiciones y que beneficia a las familias pobres (con una renta mensual por persona de R\$ 60,01 a R\$ 120,00) y a las extremadamente pobres (con una renta mensual de R\$ 60,00).

Ciudad global

La antigua discriminación espacial, de la cual son ejemplos algunos barrios de la ciudad de São Paulo, ya no segrega y no busca, utópicamente, separar a las personas entre ricas y pobres. La fuerza del trabajo es requerida en todos los lugares del espacio urbano. La nueva discriminación busca aproximar a las personas espacialmente, pero separarlas socialmente. Empleadas domésticas, meseros, chóferes y motociclistas son necesarios, y por ello deben vivir cerca –y la propia población pobre quiere vivir cerca de sus empleos- pero socialmente separados.

De esta forma, la “ciudad global” son los nuevos edificios auto-suficientes, inteligentes, donde solamente se ingresa por los garajes, previa total identificación: “sonría, usted está siendo filmado”. Con agencias bancarias en su interior y hasta una agencia de correos. Un ejemplo de la “ciudad global” es un edificio en la ciudad de São Paulo, que no solamente tiene un helipuerto, sino un verdadero aeropuerto para helicópteros, que efectúa ahí mismo, el check in de ejecutivos que viajan al exterior o a otros Estados, sin necesidad de pasar por los mostradores de las empresas en los aeropuertos de uso común.

3 - DERECHOS HUMANOS Y DESIGUALDADES

Específicamente después de 1988, cuando el Brasil promulgó su nueva Constitución Federal, varias políticas públicas fueron creadas otorgando institucionalidad a los derechos. Hace dos décadas era imposible no ver que hubo un avance en las políticas de derechos humanos. Sin embargo, aún cuando los DHESCAS (DHESCAS son las siglas para: Derechos Humanos (civiles y políticos), Económicos, Sociales y Ambientales) hayan sido incorporados en el debate sobre el modelo de desarrollo, la fuerza política para la real implementación de estos derechos continua siendo relativamente frágil. Una preocupación constante del INESC ha sido la de acompañar los avances y retrocesos recientes sobre el tema de los derechos humanos, identificando los desafíos que las organizaciones sociales, los movimientos y las ONG deben enfrentar y superar para hacer avanzar la implementación de esta agenda.

Muchas veces relegados como temas de menor importancia, el racismo y la violencia policial también son parte de esta compleja agenda. Para ayudar a pensar en nuevo Brasil, bajo la óptica de los derechos humanos, Sueli Carneiro, Directora de la ONG Geledés/Instituto de la Mujer Negra; Silvia Ramos, del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad Cândido Mendes (CESeC/Ucam); y, Paulo Carbonari, del Movimiento Nacional de Derechos Humanos (MNDH), presentan sus argumentos para enriquecer el debate sobre el modelo de desarrollo.

Es importante saber que en el Brasil el pensamiento de Izquierda siempre privilegió la lucha de clases para explicar nuestras contradicciones sociales, colocando en segundo plano a las desigualdades raciales. El hecho de que de la raza social y culturalmente construida sea determinante en la configuración de la estructura de las clases en nuestro país, siempre fue soberanamente ignorado por el pensamiento moderno brasileño. Solamente hace poco tiempo, los economistas vienen calificando la magnitud de estas desigualdades al punto de -en este momento- poder afirmar que vivimos en un país apartado racialmente. Sueli Carneiro ha repetido, en diferentes espacios de debate en los cuales ha participado que: “Las disparidades en los Índices de Desarrollo Humano (IDHs) identificadas entre personas blancas y negras, indican que el segmento de la población brasileña autodeclarado blanco, presenta en sus indicadores socioeconómicos, como la renta, la expectativa de vida y la educación, padrones de desarrollo humano compatibles con los de países como Bélgica. Mientras que, el segmento de la población brasileña, autodeclarado negro (personas negras y pardas, según la clasificación elaborada por el IBGE⁷), presenta un IDH inferior al de muchos países en vías de desarrollo, como África del Sur que, hace menos de dos décadas, erradicó el régimen del Apartheid”.

Aún así, existen avances en la forma en cómo el país y sus instancias legales comienzan a combatir el racismo. Entre las principales conquistas se encuentra la promulgación de la Ley 10.639/03, de enero de 2003, que establece nuevas directrices y bases de la educación nacional y pasó a instituir en syllabus oficial de la red de enseñanza la obligatoriedad de la temática Historia y Cultura Afro-brasileña. Es, sin duda alguna, un referente en el sentido de introducir en la educación una forma de valorizar la participación de la población afro-brasileña en la historia del país, así como rescatar los valores culturales africanos. Además de la institución de la temática en dicho syllabus, el Decreto también incluyó dentro del calendario escolar la fecha del 20 de noviembre como el Día Nacional de la Conciencia Negra. Sin embargo, el Presidente Lula vetó dicho artículo de la Ley, según el cual, las disciplinas de Historia del Brasil y Educación Artística deberían dedicar por lo menos el 10% de su contenido programático a la temática negra. Este artículo fue considerado inconstitucional por no observar los valores sociales y culturales de las diversas regiones del país.

Otro avance registrado se encuentra en el área de la salud: la aprobación de la Política Nacional de Salud Integral de la Población Negra. Dicha decisión representa un reconocimiento, por parte del gobierno brasileño, a las iniquidades raciales presentes en el acceso a la salud que exponen, desproporcionadamente, a las personas negras a la mortalidad y enfermedad por causas preveni-

⁷Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

bles y evitables. Dentro de ellas, se destacan: la mortalidad infantil de niños de hasta 1 año de edad; el descanso con la prevención y atención en relación con las enfermedades prevalentes entre la población negra, como es el caso de la diabetes, la hipertensión arterial, la anemia falciforme y la miomatosis; los números superiores de mortalidad materna entre mujeres negras resultantes de las diferencias percibidas por los estudiosos del tema, que son peores, en la asistencia en el embarazo, parto y el puerperio. Igualmente como en el caso de la Ley 10.639/03, la implementación de esta política, donde ocurre, se debe a la acción de sensibilización de los profesionales de salud por parte de las organizaciones de los movimientos sociales, en especial, de mujeres negras.

Vale la pena dejar constancia, además, el reconocimiento de la administración Lula del racismo institucional como una cuestión estratégica en el combate al racismo y a las desigualdades raciales. El Proyecto Combate al Racismo Institucional -una alianza entre el Ministerio del Gobierno Británico para el Desarrollo Internacional (DFID, por sus siglas en inglés) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en cooperación con las prefecturas municipales y las organizaciones de la sociedad civil de la región del Nordeste, fue una experiencia exitosa desarrollada durante el primer mandato del Presidente Lula. Sueli Carneiro explica que por medio de este programa, las instituciones públicas podrán capacitarse para superar las trabas ideológicas, técnicas y de naturaleza administrativa, que dificultan el combate de los efectos combinados del racismo y del sexismo, poderosos obstáculos para el acceso al desarrollo. Sueli lamenta “Infelizmente, este convenio acaba de ser cancelado”.

Ella resalta que otros programas gubernamentales de significativa importancia para la población negra fracasaron: “El Programa Primer Empleo, que preveía el incentivo a las empresas como un mecanismo de combate a la discriminación de jóvenes pertenecientes a grupos discriminados, como negros, mujeres y deficientes, no funcionó”. Sueli también afirma que “en el área de la seguridad pública, los jóvenes negros se encuentran más expuestos a una matanza que se asemeja al genocidio, con absoluta inacción por parte del gobierno”.

3.1 - Derecho a la Seguridad

En el Brasil, 50 mil personas son asesinadas por año. La tasa de muertes violentas están entre las más altas del mundo hace más de dos décadas: de 11,7 homicidios por 100 mil habitantes, en 1980 se subió a 26,9, en 2004. Países de Europa Occidental tienen tasas inferiores a tres muertes intencionales por 100 mil habitantes y los Estados Unidos se encuentran en la franja de cinco a seis muertes. Una característica saltante en el panorama brasileño es la concentración de los homicidios en la población joven. En la franja de edad entre los 15 y 24 años, las tasas son extraordinariamente más altas que las verificadas en la población como un todo. La tendencia es nacional, y se da de la misma manera en los Estados con tasas de violencia letal más bajas. Entre las

Ocupando espacios

Fernando Henrique Cardoso fue el primer Presidente en la historia de la República brasileña en declarar –durante su discurso de toma de poder– que existía un problema racial en el Brasil que era necesario de ser enfrentado con audacia política. Fue en su gobierno que las primeras políticas de inclusión fueron gestadas e implementadas, siendo enormemente impulsadas por el proceso de construcción y participación del Brasil en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Similares de Intolerancia, realizada en Durban, África del Sur, en 2001.

En correlato a dicha iniciativa y acrecentada por las propuestas organizadas en el documento titulado Brasil sin Racismo, el Presidente Lula profundiza este compromiso con la erradicación de las desigualdades sociales raciales. Sin embargo, el primer mandato del gobierno Lula se caracterizó por gestos simbólicos de grande envergadura y tibieza a la hora de la implementación de medidas concretas de promoción de la igualdad racial. En ningún otro gobierno hubo la presencia

de personas de raza negra ocupando puestos de primer nivel, como una franca señal para la sociedad de la existencia de una política de reconocimiento e inclusión de las personas negras en las instancias del poder.

Pero, en relación al primer mandato del gobierno Lula, uno de los ejemplos más emblemáticos de los avances y retrocesos está en la forma de cómo la cuestión racial fue contemplada en el Plan Plurianual (PPA) 2004-2007, a través de una especie de “previsión presupuestaria” federal. En el artículo de raza del Plan Plurianual 2004-2007, con “transversalidad de género y generación”, de Iradj Egrare, el autor constata inmediatamente la “ausencia generalizada de la transversalidad de raza en las políticas públicas brasileñas.” El trabajo de Egrare señala el confinamiento o restricción del tema de las desigualdades raciales al ítem 9 (desafío) de las 12 directrices del Mega-objetivo I: Inclusión Social y Reducción de las Desigualdades Sociales. Tal confinamiento se traduce, en concepto del autor, como la inexistencia de una perspectiva transversal en el tratamiento del tema.

personas no jóvenes, el 9,6% del total de muertes están relacionados a causas externas. En algunos Estados, la tasa de homicidios de jóvenes sobrepasa los 100 por 100 mil habitantes jóvenes.

Cuando examinamos algunas áreas urbanas pobres, enfocándonos en los jóvenes, encontramos tasas de más de 200 homicidios dolosos por 100 mil habitantes. Las tasas de homicidios para hombres negros son significativamente más altas en todas las edades, a partir de los 11 años, pero son más acentuadas entre jóvenes con edades comprendidas entre los 28 y los 26 años. La tasa para

jóvenes blancos de 24 años, por ejemplo, es muy alta, casi 50 por 100 mil habitantes. Sin embargo, la tasa para jóvenes negros de la misma edad, es aún más alta, llegando casi al doble: 90 por 100 mil habitantes.

El sexo también es un factor explicativo importante para comprender las características de la violencia mortal en el Brasil. Las mujeres son las víctimas más frecuentes de la violencia doméstica y son el principal blanco de las lesiones corporales. Paralelamente a la edad y al género, algunos estudios han identificado la existencia de una dramática concentración de muertes violentas entre la población negra (sumatoria de las personas clasificadas como negras y pardas), indicando que la distribución desigual de la riqueza y de los recursos sociales (educación, salud, saneamiento) entre las personas blancas y negras en el Brasil acaba por provocar otro tipo de desigualdad: aquella en la distribución de la muerte por violencia. De esta forma, son los negros y, dentro de esta población, los más jóvenes, las víctimas preferenciales de la violencia mortal. Los datos anteriormente citados fueron una contribución de la investigadora Silvia Ramos, del CESeC/Ucam para el debate promovido por el INESC sobre el modelo de desarrollo para el Brasil. Son aterrorizantes y traducen con exactitud la situación a la que están sometidos los jóvenes negros brasileños.

Juntas, las variables de edad, género, color y clase social también son un factor de riesgo para ser considerado sospechoso por la policía. Los jóvenes pobres, predominantemente de raza negra, habitantes de favelas (barriadas) y de las periferias de los grandes centros, son sospechosos preferidos de la policía. Una investigación realizada por el CESeC/Ucam, en la ciudad de Río de Janeiro, en 2002, reveló que el 57,9% de las personas detenidas por la policía mientras caminaba por la calle, tiene entre 15 y 29 años. A su vez, considerando a las personas detenidas en todas las intervenciones policiales, los negros sufren de inspección corporal en el 55% de las veces en las que son abordados contra el 32,6% de las veces cuando los blancos son abordados (Ramos; Musumeci, 2005). La distribución de las propias operaciones policiales varía de barrio a barrio, predominando los abordajes a pie en la calle, con inspecciones corporales, en las áreas pobres y redadas de automóviles, casi siempre sin revisiones corporales, en las áreas más ricas.

3.2 - Nuevas Ideas

Movilizados en torno de la cultura y por medio de diferentes lenguajes, como la música, el teatro, la danza y el cinema, grupos coordinados por los propios jóvenes surgieron en el escenario de las regiones metropolitanas brasileñas, expresando ideas y perspectivas de la juventud de las favelas. También, intentan producir imágenes alternativas a los estereotipos de la criminalidad, asociados a ese segmento de la sociedad y “disputan” los jóvenes de dichas áreas con el tráfico de drogas, ejerciendo una seducción ligada al glamour del arte, al reconocimiento y al éxito.

La mayoría de estas iniciativas se equilibra entre la denuncia de la violencia policial, por un lado, y la búsqueda de autonomía con relación al despotismo de los grupos armados, por el otro. Algunos de estos grupos procuran ejercer pape-

Distribución de la Violencia

En las regiones metropolitanas brasileñas, la criminalidad violenta creció principalmente en las favelas y en los barrios pobres de las periferias urbanas. En dichas áreas, a partir de la década de 1980, se instaló el tráfico de drogas y aparecieron los conflictos entre facciones rivales. Asimismo, a lo largo de dos años, se incrementaron la violencia y la corrupción policiales. En tales territorios, pobres y carentes de servicios públicos, se registran los más altos índices de violencia mortal: las principales víctimas son los jóvenes negros y pobres.

La desigualdad en la distribución de la violencia mortal entre los diversos barrios del municipio de Río de Janeiro es significativa. Los barrios de la zona sur de la ciudad (Copacabana, Ipanema, Leblon, Lagoa, Jardim Botânico y Barra da Tijuca), donde viven las personas con mayor poder adquisitivo, presentan tasas más bajas de homicidios. En esas zonas son comunes tasas que varían de

4,7 a 10 homicidios por 100 mil habitantes, cercanas a los padrones norteamericanos. Por su parte, en los barrios de la zona oeste y en los suburbios, que reúnen regiones pobres repletas de favelas (Acari y Santa Cruz, Complexo do Alemão, Vigário Geral y Parada de Lucas, por ejemplo), se llegan a registrar tasas de hasta 84 homicidios por 100 mil habitantes.

Según Silvia Ramos, esta distribución configura la presencia de dos padrones radicalmente diferentes en la misma ciudad: en una distancia de 40 minutos, entre los barrios más pobres y los más ricos, entre las personas más bien servidas por la presencia del Estado y en donde el mismo se ausentó por largos años, grupos armados mantienen el control total sobre territorios enteros de áreas de favelas. Ramos asegura: “En la práctica, son dos países conviviendo en la misma ciudad. También son dos policías y dos políticas de seguridad paralelas”.

les de mediadores en la guerra entre facciones del tráfico de drogas y asumen, abiertamente, la misión de “sacar a los jóvenes del tráfico”, no siendo esta necesariamente un regla común a todos los grupos. Otras iniciativas, por su parte, asumen posiciones hasta cierto punto ambiguas en relación con el mundo del crimen. Es el caso de los grupos de la música llamada hip hop que se identifican con los “manos presos” (hermanos presos) y se concentran en la denuncia de que la criminalidad está asociada, a manera de estereotipo, con los jóvenes negros habitantes de la periferia.

Identificadas como nuevas mediaciones en las respuestas a la violencia, no se puede afirmar que estas iniciativas son las únicas o las más eficientes para sacar a los jóvenes del tráfico. Sílvia Ramos recuerda que hay un número inmenso de grupos religiosos, especialmente de orientación pentecostal, dedicado a la conversión religiosa de jóvenes involucrados con el crimen: “Además

de ello, en las favelas y los barrios más pobres, proliferan escuelitas de fútbol y programas deportivos orientados para combatir el ocio, descubrir talentos y crear alternativas profesionales”.

La investigadora también recalca que aún en el campo de la cultura se desarrollan innumerables proyectos de danza, circo, música y teatro, que parten tanto de la iniciativa gubernamental como la privada, dirigidos al esparcimiento y la profesionalización de los adolescentes. “Las características específicas de los nuevos mediadores son: la lideranza de los grupos por los propios jóvenes oriundos de las favelas y la producción de un discurso en primera persona; la capacidad de expresar signos con los cuales los jóvenes de las favelas se identifiquen y, al mismo tiempo, crear modelos que recusen las imágenes tradicionales de los jóvenes de las favelas; la creación de nuevas metáforas a través de historias de vida; la capacidad de transitar por los grandes medios de difusión y en la comunidad, entre diferentes clases sociales, facciones y gobiernos, es decir, transitar entre lo local y lo universal” afirma Sílvia Ramos. En un escenario tan complejo, Sílvia también resalta que los jóvenes mediadores no pueden ser tomados como ejemplos de espíritus contemporáneos sintonizados con los valores de la modernidad. Ella afirma: “Son grupos heterogéneos, pero, predominantemente, masculinos. Evidentes trazos de misoginia o de homofobia pueden ser observados en las prácticas y en las construcciones discursivas de estos grupos”.

3.3 - Actores de la Sociedad Civil

Las acciones llevadas a cabo por las organizaciones de la sociedad civil brasileña, especialmente aquellas asociadas a los movimientos sociales, fueron decisivas para la construcción de políticas de respuestas al SIDA, la salud de la mujer y la reforma psiquiátrica, por dar unos ejemplos en el campo de la salud. Asimismo, con relación a las políticas ambientales, las ONG y los activistas sociales fueron y han sido importantes en la elaboración de respuestas brasileñas en dicho sector. Pero, sin embargo, en el campo de la seguridad pública, aún predomina la pequeña participación de los actores de la sociedad civil organizada en las discusiones sobre la reforma de la policía; el desarme; las políticas de seguridad; así como en otros temas centrales para la democracia brasileña.

Para Sílvia, también las grandes ONG brasileñas, decisivas en la creación de las agendas políticas nacionales, deberían ser menos defensivas en relación con los temas de la seguridad pública. El camino, según dicha investigadora, esta siendo trazado por otros grupos: “En la condición de nuevos mediadores, algunos grupos parecen demostrar, todavía, que localmente, es posible ofrecer respuestas creativas en un campo con una pequeña tradición participativa de entidades civiles. Tales novedades no deberían ser despreciadas por quien pretende acompañar las salidas que la sociedad brasileña va a producir en los próximos años, para enfrentar la violencia y construir caminos para alcanzar la seguridad y la justicia”.

Juventud y Policía

Pero, a pesar de los obstáculos, los grupos de jóvenes de las favelas ha sido la principal fuente de denuncia, reflexión y discusión, en el ámbito nacional, sobre las relaciones de los jóvenes con la policía, el racismo policial y la discriminación que los jóvenes de las favelas y las periferias sufren diariamente, y que no sólo se dan en la relaciones con la policía, sino también con los empleadores, los grandes medios de comunicación y todos los que se basan en los estereotipos de jóvenes de la periferia, como asociados a la criminalidad y la deshonestidad.

El Proyecto Juventud y Policía, desarrollado por la banda AfroReggae, en el Estado de Minas Gerais, en alianza con el Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad Cândido Mendes (CESeC/Ucam), es un ejemplo de las posibilidades que son abiertas por las intervenciones directas de movimientos sociales en procesos de adopción de políticas de seguridad democráticas y contemporáneas y en procesos de reforma de la policía. En 2002, la Banda AfroReaggae produjo un video clip para la canción “Tô Bolado”, con sucesivas imágenes de vio-

lencia policial, configurando una franca oposición del AfroReggae para con la policía. En el mismo año, unos de los miembros y fundador del grupo fue alcanzado por un tiro de fusil, durante una operación policial comandada por el Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar (BOPE-PM), de Río de Janeiro.

Al final del mismo año, la coordinación de la entidad procuró la ayuda del CESeC/Ucam para elaborar un proyecto con la policía (y no contra ella). Un proyecto de “invasiones culturales” fue presentado a la Fundación Ford, que lo aprobó inmediatamente. Las negociaciones con la PM de Río de Janeiro se frustraron después de meses de tentativas y no fue posible desarrollar la propuesta en aquel Estado. En 2004, la Secretaría de Defensa Social y la PM del Estado de Minas Gerais (MG), convidaron a AfroReggae y al CESeC para desarrollar el proyecto en los batallones de la ciudad de Belo Horizonte. El Proyecto se llevó a cabo durante todos los años subsecuentes y, en 2007, se encuentra en proceso de institucionalización por parte de la PM-MG, que lo transformará en un programa regular de policía.

Además de las organizaciones de los jóvenes de las favelas, algunos segmentos de los movimientos sociales, como el Movimiento Homosexual, ha conseguido grandes avances, como la exigencia de presencia policial y protección respetuosa y adecuada a las especificidades de la homofobia. En abril de 2007, entidades de dicho movimiento, con el apoyo de la Secretaría Especial de Derechos Humanos (SEDH) y de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (SENASP), realizaron, en Río de Janeiro, el Primer Seminario Nacional de Seguridad Pública y Combate a la Homofobia. En dicho encuentro, se reunieron

policías de las 27 Unidades de la Federación, gestores de la seguridad pública, especialistas, colaboradores académicos y activistas homosexuales, (gays, lesbianas y transexuales) de todo el país. Como primer paso para aproximar la agenda del Movimiento Homosexual con la agenda de reformas de la policía, el encuentro fue extremadamente positivo y significó un paso histórico. Sílvia Ramos cree que el Movimiento Homosexual usó un método que en el futuro puede ser utilizado por otros movimientos.

El Movimiento Negro también debería estar directamente comprometido en el tema de la violencia, considerando que las variables raciales están fuertemente presentes en la identificación de los jóvenes negros pobladores de la periferia como las principales víctimas y los principales autores de la violencia. Ramos también complementa: “El contingente policial brasileño es predominantemente negro, siendo el racismo institucional un problema aún más complejo entre los policías negros”.

3.4 - Desigualdades y Contradicciones

Paulo César Carbonari, Coordinador del Movimiento Nacional de Derechos Humanos (MNDH), recuerda que la desigualdad no es un fenómeno circunstancial en el Brasil, sea bajo el aspecto de la organización social, económica, política o cultural: “Parece ser una opción estructurante de la vida brasileña, que se reproduce como una estrategia de integración o de desintegración social”. La pobreza y la miseria, manifestaciones generalizadas de la desigualdad -y de la violación sistemática de los derechos humanos- nunca pueden ser consideradas apenas de forma genérica. En el Brasil, existe color de piel y sexo. Las tentativas de su superación -y en los últimos años el esfuerzo para tal cometido ha sido obvio- resultan insuficientes, ya que, en general, parecen llegar a resultados positivos en la reducción de la desigualdad en los indicadores generales, pero que, sin embargo, se mantienen en la práctica inalterables, cuando tienen que ver con el color y el sexo.

Para Carbonari, es difícil de creer que el Brasil ya tomó una opción fundamental para la superación de la desigualdad -manteniéndose vacía la consagrada expresión liberal de la igualdad de todas las personas ante la Ley. Carbonari asegura que: “El problema de la desigualdad continua siendo un problema para las personas más débiles, que nunca salieron del lugar donde nacieron (ni siquiera para registrarse o para ser registradas); que aún no conocieron los Estados Unidos o Europa. ¡Problema de ellos! Al final, es patente su falta de iniciativa, su pereza congénita. Parecen tener vocación para la pobreza. Cuando se levantan para exigir un lugar en la sociedad, lo hacen de la manera equivocada -usan la fuerza, ocupan propiedades privadas, quieren quedarse en lugares que impiden grandes y necesarios proyectos de desarrollo, quieren cuotas; reparaciones, la cárcel para maridos y compañeros- de ahí es que es legítima la represión, la criminalización... la eliminación”. Y complementa: “El cinismo y la hipocresía están en la base de la opción por la desigualdad, que es también una

opción contra los derechos humanos, como universales -ellos existen, pero no para ciertos tipos, que sólo supuestamente son humanos- este discurso es tan significativo que es exactamente el mismo que estuvo en la base de las justificativas de Auschwitz”.

Más Acción, Menos Retórica

Los Derechos Humanos pueden convertirse en un contenido retórico y fácilmente escuchado saliendo de las más diversas bocas, sea para promoverlos, o para criticarlos. Los diversos agentes tienen discursos diferentes. No todos los que hablan de derechos humanos se refieren al mismo contenido. La práctica es el campo de la política y en ella es donde se puede identificar su verdad. En este sentido, es justamente actuando, que se podrán superar las contradicciones. La política no se agota en la técnica de conciliar intereses y de construir consensos basados en argumentos. Por ello, más que retórica, se precisa de acción política.

En los últimos años, se han venido acumulando muchas propuestas, sugerencias y análisis. Falta coraje solidario para hacer que las intenciones se transformen en acciones. A continuación una reflexión programática de los desafíos que pueden fortalecer la lucha por los derechos humanos en el Brasil:

1 – Fortalecimiento de la organización popular

Son las organizaciones populares las que mantienen vivo el proceso de resistencia al modelo de desarrollo que excluye y propone el ensanchamiento del contenido de los derechos humanos y la ampliación de

los espacios de participación, dando visibilidad a los sujetos de derecho que son ignorados y se sienten vulnerables ante la sociedad. Fortalecer la organización popular significa, sobre todo, ampliar las condiciones para la realización de los derechos humanos. Significa, también, dar atención, solución y expresión a las contradicciones estructurales que caracterizan a las sociedades profundamente desiguales y asimétricas. Significa generar condiciones apropiadas para lidiar con la mediación de conflictos de forma participativa y programática. Significa creer que los sujetos de derecho son todos seres humanos y que solamente ellos podrán saber cuál es la mejor manera para realizarlos efectivamente.

2 – Nuevas estrategias de lucha

La organización popular de lucha por los derechos humanos tiene una presencia significativa en la sociedad brasileña. Sin embargo, existen segmentos de la organización social que todavía están más lejanos de la incorporación de la agenda de derechos humanos (el movimiento sindicalista, por ejemplo). Tal vez, el mayor desafío en la construcción de nuevas estrategias

de lucha esté en la ampliación de la capacidad de movilización social en torno de la agenda de derechos humanos, enfrentando los obstáculos culturales conservadores existentes en la opinión pública.

Hacer popular la adhesión positiva y el reconocimiento amplio de la población para con los derechos humanos se impone como un desafío estratégico, sea para ampliar la base de apoyo de la lucha, o sea, principalmente, para generar las condiciones necesarias para ampliar la realización de los derechos. Las nuevas estrategias de lucha por los derechos humanos exigen la construcción de una agenda diferenciada, que pasa por la reflexión sobre el sentido de los derechos humanos –las concepciones que son construidas a partir de ellas- y, sobre todo, por la explicación de nuevos contenidos y diálogos y la construcción conjunta de esos diversos agentes y procesos organizativos.

3 – Nueva institucionalidad de protección

El Brasil ya dio pasos significativos para dotar a la sociedad y al Estado con condiciones para lidiar con los derechos humanos, asumiendo la responsabilidad de su realización, así como con la reparación de violaciones. En esta dirección, asumir las deliberaciones de la IX Conferencia Nacional de Derechos Humanos (2004), que acumuló un conjunto de propuestas concretas para hacer efectivo el Sistema Nacional de Derechos Humanos, es el

primer gran desafío. Dicha propuesta, además de efectuar un diagnóstico de los problemas institucionales de fondo, presenta un conjunto de medidas para enfrentar la situación, sea a través de la mejora de los instrumentos, mecanismos, órganos y acciones que ya existen, o mediante la implementación de otros.

Otro desafío es el la incorporación efectiva de los derechos humanos en el conjunto de las políticas públicas, junto con la mejora y la ampliación de acciones de políticas públicas específicas de derechos humanos. La construcción de una política nacional de derechos humanos exige, entre otras medidas, la actualización del Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH). Pero también va más allá de ello, ya que el mayor esfuerzo está en, efectivamente, comprender e implementar acciones y derechos humanos en todos los espacios de acción pública, superando la idea de que el órgano de gobierno (federal) de derechos humanos (SEDH) debe hacerlo todo sin ningún apoyo adicional. Si el proceso no resulta de un esfuerzo conjunto del gobierno y del poder público, este permanecerá como una acción importante, pero al margen, puntual, residual y aislada. Entender que entre las primeras tareas del Estado está el compromiso con los derechos humanos es uno de los más grandes esfuerzos políticos de la agenda pública. Hacer este ejercicio con una amplia y califi-

cada participación por parte de las organizaciones de la sociedad civil es la mediación esencial para que los sujetos de derechos humanos sean los autores de las medidas que serán implementadas para atender sus derechos.

4 – Enfrentamiento del modelo excluyente de desarrollo

Sin una amplia y fuerte acción de distribución de renta y riqueza –lo que no se consigue solamente con políticas de transferencia de renta como programa público– difícilmente se podrá revertir el proceso y garantizar un desarrollo sostenible y solidario, capaz de abarcar a toda la población brasileña. La profundización del modelo liberal de organización del Estado y de la economía y de la inserción del país en el proceso de globalización han contribuido más para agravar la situación en lugar de enfrentarla. El cumplimiento de los compromisos con el ajuste estructural ya no depende simplemente de los acuerdos con las instituciones internacionales (el FMI, por ejemplo); situación que parece haber sido incorporada a la práctica política. El Brasil aún no ha sido capaz de construir una alternativa de desarrollo propia; hecha a partir de la autodeterminación de su pueblo como un derecho –más que una acción únicamente de la iniciativa libre del mercado, como preconizan los instrumentos internacionales de derechos humanos. Pensar en ellos como esos presupuestos y en el

contexto de la integración regional y de cada vez mayor globalización, con una postura soberana, es una cuestión que se impone. Construir un amplio proceso capaz de generar nuevas bases para el desarrollo, entendido como un derecho humano y como un medio para la realización de todos los derechos humanos de todas las personas, es una urgencia que se presenta y que precisa traducirse en compromiso por parte de los agentes sociales, políticos, económicos y culturales.

5 – La Seguridad como Derecho

El enfrentamiento de la violencia que caracteriza, profundamente, la relación social exige construir políticas de seguridad pública pautadas centralmente por los derechos humanos. Pero más que ello, exige el desafío de encontrar estrategias y alternativas para enfrentar la violencia con prácticas de mediación de conflictos, tomando como ejemplo algunas iniciativas que ya existen en otros lugares del país; con un abordaje integrado de políticas de diversas índoles; a través de la ampliación de la oferta de servicios públicos fundamentales (presencia del Estado); todas complementadas por el incentivo al proceso de organización social y comunitaria en iniciativas diversas. La reconstrucción del tejido social, dilacerado por la pobreza, por la desigualdad y por la violencia, exige más que acciones de detenciones o de contenciones –necesarias para el combate al cri-

men organizado-, entre otras formas, pero insuficientes ante la violencia cotidiana, principal causa del sufrimiento y la muerte. La implementación de la capacitación de agentes públicos y de las organizaciones de la sociedad civil para actuar en la mediación de conflictos se muestra como una alternativa consistente, y que ayuda a construir procesos de promoción de la organización comunitaria y de protección social.

6 – Promoción de la Igualdad y de la Justicia Social

Enfrentar la agenda de la desigualdad exige conjugar, de forma consistente y profunda, los aspectos que hace transversal al debate, sobre todo las cuestiones de género, los problemas étnicos y raciales, generacionales y de clase, entre otras. Las medidas a ser adoptadas no pueden confrontar estos aspectos

forzando a la sociedad a tener que optar por uno de ellos. Significa, entonces, encontrar medidas de integración social que sobrepasen la simple acomodación de intereses y el recurrente escape del debate. A la luz de los derechos humanos, la inclusión social –sinónimo de enfrentamiento de las desigualdades- exige un abordaje que preserve la diversidad y la promueva, generando espacios para que creatividad popular se desarrolle y gane un lugar. Pero ello implica enfrentar, de forma decidida, el tema de la concentración de la propiedad y de la riqueza (rural y urbana); el problema de la ampliación de la oferta de trabajo (en diversas formas); y, sobre todo, el asunto de la ampliación de la oferta y del acceso a los servicios públicos universales y de calidad, que sean efectivos como políticas de derechos humanos.

4 - POLÍTICA INTERNACIONAL

La estabilidad de la política externa brasileña es parte de aquel conjunto de mitos que, al ser tan repetidos, acaban por convertirse en verdaderos, validados por un competente conjunto diplomático que nunca dejó de vincular a la tradición, eventuales innovaciones conceptuales y de posicionamiento de la política internacional del país. ¿Pero, hasta que punto el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva innovó en la política externa? Maria Regina Soares de Lima, profesora del Laboratorio de Investigaciones en Comunicación Política y Opinión Pública (IUPERJ), es quien nos ayudará a reflexionar sobre dicha pregunta: Tal vez, una característica distintiva sea una mayor exactitud en el plano internacional, que se manifestó en la quiebra de ciertos dogmas de la diplomacia brasileña -como era el caso de la disposición al activismo en la región sudamericana, transponiendo la frontera convencional entre los asuntos domésticos e internacionales. Al ser más osado más, naturalmente se expuso más”- resalta.

Un buen ejemplo de dicha osadía fue el caso de la candidatura a un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, que figuró como prioridad estratégica de la política externa y motivó una amplia investida dirigida a los países del hemisferio sur. Pero ello, sin embargo, acabó teniendo un impacto negativo sobre la capacidad de coordinación regional. Faltó apoyo a las postulaciones brasileñas a los cargos para la Dirección de la OMC y en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se puede afirmar que la llegada al poder de los gobiernos de izquierda en América del Sur, no generó, necesariamente, alineamientos automáticos. En la realidad, las dificultades que enfrentó la cooperación regional fueron ampliadas, ya que dichos gobiernos emergentes, al contrario de los conservadores, tienden a ser más sensibles respecto a la atención de las demandas de sus respectivas sociedades, independientemente del efecto que sus acciones puedan tener sobre la cooperación regional.

Maria Regina señala como el caso más emblemático la elección de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia, y la nacionalización de los hidrocarburos (mayo de 2006), impactando directamente en los intereses de la Empresa PETROBRAS en dicho país: “La respuesta brasileña de procurar el diálogo, y no la confrontación, como querían los sectores ponderados de la opinión pública, representó uno de los puntos más altos de la política externa del gobierno Lula, al preservar una relación estratégica para el país”. Lo que se vio en este episodio fue el descompaso entre el peso regional del Brasil y su influencia de hecho, agravado por la propia asimetría estructural que reavivó antiguos temores relacionados con la hegemonía en América del Sur.

Aún cuando se cuenta con algunas medidas innovadoras, en algunos casos, el gobierno Lula también enfrentó problemas por la falta de acciones más osadas. Maria Regina nos hace recordar que a la política externa de Lula le costó reconocer la necesidad de implementar medidas atenuantes para la asimetría estructural entre los socios menores del MERCOSUR (Uruguay y Paraguay) y los más grandes (Brasil y Argentina). La creación del Fondo de Convergencia Estructural en 2006, tuvo ese objetivo, en una situación de casi implosión del bloque. La ausencia brasileña en la crisis entre Uruguay y Argentina, para preservar la relación estratégica con este último país, no contencioso originado por la instalación de las procesadoras de celulosa cerca de la frontera uruguaya, también integra este conjunto de ausencia de decisiones de la política externa. De la misma forma, el gobierno Lula mantuvo un cierto legado de matiz soberano y de poca disposición para la delegación y la creación de instituciones y normas con características de supranacionalidad.

4.1 - Negociaciones Comerciales

Desde el fin de 2006, hubo una fuerte movilización del gobierno brasileño en general, y del Ministerio de Relaciones Exteriores, en particular, en la tentativa de retomar las negociaciones de la Ronda de Doha, y de las negociaciones comerciales en la Organización Mundial del Comercio (OMC). El impasse central

Débiles y Fuertes

Gran parte de la energía negociadora brasileña estuvo orientada hacia la mudanza de las reglas, sea en el campo comercial o en el ámbito del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La creación del G-20 (durante la reunión de Cancún, México, en 2003), representó el renacimiento de la coalición tercer-mundista. Ahora, sin embargo, está centrada en los intereses agrícolas de los países en vías de desarrollo y en la hipocresía explícita de la posición negociadora de los países desarrollados. Su creación (G-20), recuperó el papel ya desempeñado anteriormente de “intermediario” entre los “débiles” y los “fuertes”. Por otro lado, la novedad en la negociación de Doha fue el papel demandante de la liberalización de los mercados agrícolas de los EE.UU. y de Europa, en función de la alta competitividad de las exportaciones brasileñas, además del mantenimiento de la agenda negociadora tradicional de acceso a mercados y de fortalecimiento de las

normas multilaterales. A pesar de este panorama, el precio de la lideranza de la coalición Sur fue aceptar las demandas máximas, en pro de la cohesión, en vista de la diferencia estructural entre los aliados.

En la postulación a un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, la política externa reiteró la aspiración histórica de la comunidad de la política externa nacional. La innovación, en parte motivada por el conjunto de obligaciones que dicha postulación implica, se materializó en el comando brasileño de una fuerza de paz en Haití. En este caso, el Brasil se dispuso al ejercicio de un papel más intervencionista, de cara a una situación de inestabilidad crónica, que podría reverberar sobre su perímetro de seguridad. Pero, ello no ocurrió en la década de 1990, cuando el Brasil se abstuvo de apoyar, en el ámbito del Consejo de Seguridad, el envío de una misión multinacional a dicho país. A pesar de ello, tal innovación fue poco

se da en torno de la tentativa de apertura de mercados y en la reducción de los subsidios, en productos agrícolas, de los países de mercados más grandes. Particularmente los EE.UU. y la EU, en cambio de la apertura del mercado de productos industriales y los servicios de los países en desarrollo. Según Adhemar Mineiro, técnico del Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos (DIEESE) y Asesor de la Secretaria Ejecutiva de la Red Brasileña para la Integración de los Pueblos (REBRIP), esta ecuación ya se dio antes, en las negociaciones -actualmente suspendidas- para crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y también en las congeladas negociaciones entre el MERCOSUR y la UE. Adhemar afirma que en todos estos casos, la posición central brasileña fue una búsqueda firme por la expansión de las posibilidades de negocios para la gran agricultura comercial de exportación del país, con límites para proteger elementos que permitieran la existencia de políticas de desar-

discutida en el ámbito doméstico, aún cuando tenía una dosis razonable de incertidumbre con relación al histórico éxito de operaciones de este tipo.

En las relaciones con los EE.UU. y la Unión Europea (UE), prevaleció la continuidad: un fuerte contenido económico y una orientación pragmática, ante la evidente importancia que representan dichas áreas para las exportaciones brasileñas y para las inversiones en el país. Las dificultades de obtenerse un acuerdo ALCA-MERCOSUR y uno Unión Europea-MERCOSUR se derivan, del lado brasileño, de la complejidad de los costos difusos que tales acuerdos envuelven por cuenta del impacto de las eventuales obligaciones asumidas en diversas áreas y los temas de la política doméstica.

Los TLC negociados con los EE.UU. son acuerdos de libre comercio que se quedan sólo en el papel y en la retórica liberal. La rigidez de las reglas de origen y las concesiones en diversas disciplinas y temas, como las compras gubernamenta-

les; las reglas de inversión y la propiedad intelectual, inciden directamente en la capacidad de los aliados para desarrollar políticas industriales. Es de causar sorpresa que el Brasil no cuente con una política industrial activa. Con la UE, las obligaciones futuras son de tal magnitud que implicarían no solamente la creación de una legislación específica, sino también una mudanza constitucional.

Por su parte, en el segundo mandato del gobierno Lula, por lo menos hasta el momento, la aproximación con los EE.UU. en los que respecta a la cooperación en programas de los bio-combustibles y de energías alternativas, generó una relativa suspicacia entre algunos socios sudamericanos, en especial en Venezuela y Argentina. Pero fue acompañada por gestos positivos de refuerzo de la alianza con dichos países. Una vez más, se hizo evidente, el estilo conservador de la política externa del gobierno de turno, orientado a no profundizar procesos contenciosos con los vecinos sudamericanos.

rollo industrial y la capacidad de regulación interna en los sectores de servicios y en los temas ligados a la propiedad intelectual, a la defensa de la competencia y a las inversiones que, aún cuando no son muy firmes o extensos, fueron cuestionados por los negociadores.

Para él, esta contradicción es interesante, especialmente en el momento en que las discusiones internas en el Brasil apuntan hacia la cuestión del crecimiento económico, en especial por el lanzamiento del Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC). “De un lado, existe el objetivo del crecimiento económico y, de otro, la idea de dar prioridad a la ampliación de la opción preferencial hacia el mercado externo, por los saldos comerciales, que no pueden garantizar el crecimiento acelerado, tal y como se ha demostrado en los últimos cuatro años. Por mucho que sea el dinamismo del sector exportador en este periodo, este estuvo limitado para impulsar el crecimiento económico.” Tales limitaciones reflejan

en las negociaciones comerciales, una ambigüedad que ha caracterizado al gobierno actual desde su inicio: entre el mantenimiento de la ortodoxia monetaria y financiera en la gestión de la política macroeconómica -lo que ocasiona intereses altos, tasa de cambio apreciada y un enorme esfuerzo exportador para intentar minimizar la fragilidad de las cuentas externas, generadas por la liberación financiera, y de los movimiento de capital; y, los sueños de un crecimiento más acelerado y la reducción de las tasas de desempleo- lo que implicaría políticas industriales activas y un énfasis en el mercado interno.

4.1 - Espacios de Diálogo

Una de las principales novedades relativas a la administración Lula fue una mayor apertura respecto de las informaciones y los momentos de participación en la formulación de la posición negociadora brasileña en varios procesos en los cuales el país se involucró. Fueron abiertos espacios de integración y de diálogo -algunas veces, formales, otras veces informales- con organizaciones de la sociedad y con el sector empresarial. Fueron creados, también, espacios formales de participación al interior de las delegaciones negociadoras, en particular en el proceso de negociación relativo a la tentativa de la creación del ALCA.

Sin embargo, el grado de formalización y de transparencia parece haber sido inversamente proporcional respecto de los intereses de los negociadores brasileños, capitaneados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de caminar rápidamente hacia la obtención de un acuerdo. Comparando los procesos, la transparencia y la formalización fueron bastante amplias en el proceso de discusión para la creación del ALCA, al contar con la participación formalizada en delegaciones negociadoras, a partir de la reunión del Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA, llevado a cabo en Trinidad y Tobago, en septiembre de 2003.

La transparencia fue amplia, pero los mecanismos de participación informar en el proceso negociador entre el MERCOSUR y la UE fueron acelerados a lo largo de 2004. En lo concerniente a las negociaciones al interior de la OMC, en la Ronda de Doha, en general, hubo una razonable información y transparencia. Pero, a partir del entrapamiento del proceso negociador a mediados de 2006, y del activo papel del Brasil por retomar las negociaciones y llegar a un eventual acuerdo -partiendo del compromiso directo y activo del Ministro de Relaciones Exteriores, Celso Amonio- las informaciones tornadas públicas sobre lo que efectivamente se estaba negociando, fueron haciéndose escasas, y la participación, aún siendo informal, se hizo inviable.

Según Adhemar Mineiro, otra novedad no menos importante, fue el no asumir directamente los dogmas liberales, y si moverse con razonable pragmatismo en los procesos negociadores en los que estuvo involucrado. “El mismo pensamiento económico liberal hegemónico que llevó a la constitución de la agenda de la OMC en la década de 1990 y a los procesos de negociación para la creación del ALACA o entre el MERCOSUR y la UE, reafirmaba, permanentemente, la convicción de que el libre comercio y el libre flujo de capitales pueden,

juntos, generar un ambiente económico capaz de estimular el desarrollo y responder a las demandas sociales. En general, la presión sobre los países menos desarrollados se da en el sentido de que se integren más en el flujo internacional de comercio y tornen posibles las transferencias financieras relacionadas a los pagos de deudas y otros pasivos externos, y al flujo y reflujo internacional de los capitales financieros” - explica .

Aparentemente, el gobierno brasileño no aceptó pasivamente como escenario de negociación que el modelo liberal se cumpliría automáticamente, como se suponía anteriormente, y que, en un momento más o menos cercano, los frutos del proceso de liberalización comercial aparecerían, con ganancias de eficiencia y de una inserción positiva para todos. Por el contrario, aceptando la posición impuesta por el modelo, de un exportador de commodities, quiso negociar exactamente la ganancia de esta posición, evidenciando una postura mucho más pragmática que las de la insignificante ideología con los supuestos y consecuencias del modelo, como orientación general para su participación en los procesos negociadores en los cuales el país participó.

4.2 - La Exportación como Proyecto

El énfasis en el comercio internacional, y más que eso, en las áreas en las cuales es aparentemente posible seguir obteniendo ganancias de corto plazo -como el mercado de commodities- puede determinar un diseño de proyecto de desarrollo económico, aún cuando este no este claramente esbozado. A partir de esta percepción, surgen las tres siguientes grandes preguntas: ¿Cuál es la naturaleza de un proceso de funcionamiento de la economía, derivado de este tipo de impulso? ¿Cuáles son los efectos de este proceso, en el largo plazo, sobre la sociedad brasileña? ¿Cuánto es el aire que puede tener tal proceso en un país como el Brasil? Probablemente, no hay una respuesta segura a dichas preguntas. Mientras tanto, cabe considerar algunos elementos que pueden ayudar en esta reflexión, especialmente sobre los efectos sociales.

Lo primero, e importante, es la contradicción que existe entre la producción de un saldo exportable de productos de consumo alimentario y una población con carencias de alimentos. No estamos hablando aquí de una cesta de productos exportables, compuesta por frutas exóticas, vinos o carnes suntuosas. Estamos refiriéndonos a productos básicos de alimentación, como la soya, el maíz, la carne de res, aves, cítricos y otros. Además de ello, la transformación de la casi totalidad de la gran producción agrícola comercial en forma de commodities exportables, provoca una vinculación entre precios (en moneda nacional) en el mercado interno y de precios (en divisas) en el mercado internacional.

Otro efecto que es ocasionado por la inserción internacional basada en productos de bajo contenido tecnológico es la presión por parte de una “espiral” de reducción de los costos de la mano de obra, sea la remuneración, u otras conquistas y/o derechos legales de la clase trabajadora, vistos simplemente como costos. Si en una economía menos dependiente de la dinámica del comer-

cio internacional y menos expuesta a los movimientos de dicho comercio, los incrementos de renta de los asalariados, son transformados dinámicamente en aumento del valor de las ventas, generando un aumento de la producción en una trayectoria virtuosa: en una economía expuesta a las exportaciones de otros países y dependiente de una dinámica exportadora, aumentos de renta de la clase trabajadora y/o de sus derechos y conquistas, que pasan a ser vistos, principalmente, como nuevos aumentos de costos, que dificultan la capacidad de competencia de las empresas.

Lo que puede parecer una complicada discusión de economistas es traducida en un lenguaje empresarial sobre el aumento del “costo Brasil” como un argumento más contra las conquistas laborales. En un país con padrones desastrosos de concentración de renta nacional como el Brasil, curiosamente, la inserción internacional, a través de la ampliación de los flujos de comercio, introduce otro elemento contrario a la mejora de la remuneración de la población trabajadora en general y para la obtención de conquistas en los sectores más organizados, y que tienen poder de negociación, la reducción de la llamada competitividad de nuestros productos, especialmente aquellos de menor contenido tecnológico, debido al impacto del costo de mano de obra en el valor final de los productos.

Es preciso considerar, además, la cuestión ambiental, y los efectos de la estrategia exportadora sobre los recursos naturales. Parte de esta estrategia está basada en la posibilidad de uso intensivo de los recursos naturales del país. La gran extensión de tierras potencialmente agro-cultivables; la disponibilidad de extensiones territoriales a bajo costo; la abundancia de agua en gran parte del territorio; la presencia de sol todo el año; y, la poca o ninguna ocurrencia de catástrofes naturales, son una innegable ventaja competitiva brasileña; además de la existencia de recursos minerales que la propia extensión territorial torna posible.

Los efectos destructivos ocasionados por la construcción de represas para la producción de energía más barata; por la explotación mineral en grandes extensiones territoriales del Brasil, son apenas algunos ejemplos. Tal vez, lo más escandaloso en este periodo reciente, sea la expansión de la gran agricultura comercial sobre las áreas de parques y bosques, sobre las formas de producción y de vivir más tradicionales en el interior del Brasil. Esta actividad es impulsada por el dinamismo del padrón de inserción comercial internacional del país, especialmente, en productos como la soya, el algodón y la crianza de ganado bovino, que producen aspectos negativos, desde el punto de vista ambiental y de la seguridad pública, como el aumento de la violencia causado por la expansión de dichas actividades en la frontera agrícola del Norte, Centro-Oeste y Nordeste del Brasil. Sin cantar el efecto de largo plazo que la expansión de la gran agricultura comercial tiene sobre la concentración de tierra y el agravamiento de los problemas sociales y de la violencia en el campo brasileño.

La insistencia en una inserción exportadora de bajo contenido tecnológico debe ser vista también a través de los efectos que puede tener sobre las prioridades de la educación y del impulso al desarrollo de generación de tecnología y conocimientos en el país. No simplemente porque este tipo de opción de crecimiento depende poco de la población con mayor grado de escolaridad, porque no se pretende desarrollar una capacidad propia intensiva de generación de conocimiento y tecnología, ya que este tipo de estrategia demanda poco en esa área y parte de los “paquetes” tecnológicos son importados. Sino también, porque su propia dinámica tiene una baja capacidad de inclusión de la población nacional en el sistema educativo formal, aunque nada impide que esto sea hecho, basta una decisión política”.

Agenda para un futuro viable

La elección de la estrategia exportadora va esbozando un diseño de política de crecimiento que puede tener poco aliento en un país de las dimensiones del Brasil. Sin embargo, dicha estrategia tiene una importante influencia en las definiciones de las posiciones negociadoras brasileñas en los procesos en los cuales el país está involucrado, particularmente, en el ámbito de la OMC. Cristalizadas en la forma de acuerdos, pueden tener efectos de largo plazo sobre los diseños de la economía y de la sociedad brasileña. Según Adhemar Mineiro, “las consecuencias pueden ser bastante complicadas desde el punto de vista de pensar en una sociedad y en una economía menos desigual y más justa. Lo mismo ocurriría con relación a los efectos que pueden ser imaginados sobre el futuro de los indicadores ambientales, educacionales, de padrones de remuneración y de relaciones de trabajo y de salud en el país, entre otros”.

El dinamismo de una inserción comercial internacional basada en

productos de bajo contenido tecnológico e intensivo en recursos naturales y ambientales es contradictorio respecto a la definición de un proyecto de desarrollo que se pretenda sea capaz de generar un dinamismo propio, basado en la expansión del mercado interno y en la ampliación de la inclusión social. Pensar de esta forma, permite identificar los graves problemas potenciales en las definiciones hechas hoy en los procesos negociadores en los cuales el país participa, particularmente la OMC, y sus dramáticas consecuencias sobre el futuro del país y sus indicadores de desarrollo. Esta estrategia, si es para ser vista como tal, aparenta contener fortísimas contradicciones con una agenda social explícita del nuevo gobierno. Por ello, es necesario reposicionar las cuestiones de esta agenda como centro de las preocupaciones, y a la inserción comercial como un componente que pueda tornar posible hacer efectiva dicha agenda social en el futuro, y no hacerla inviable.

Conozca más

El INESC cree en el trabajo mediante redes, y participa de diversas redes y articulaciones nacionales e internacionales. La intervención de la Institución busca estimular el debate público y coadyuvar en la construcción de un nuevo concepto de ciudadanía, que agregue la ampliación de la participación pública; la responsabilidad y la solidaridad social. El superar la pobreza y las desigualdades sociales; el reafirmar el concepto de los Derechos Humanos (políticos y civiles), Económicos, Sociales, Ambientales y Culturales (DHESCAS), como parámetro de construcción de una moderna ciudadanía y el combate a la persistente exclusión social de amplias parcelas de la sociedad brasileña, son los desafíos permanentes de la acción política del Instituto.

Para ampliar el impacto de sus propuestas y acciones, el INESC actúa en alianzas con otras organizaciones y colectivos sociales, y se posiciona políticamente entre las organizaciones dentro del campo democrático de la Asociación Brasileña de Organizaciones No Gubernamentales (ABONG), ocupando, actualmente, la Dirección de Fortalecimiento Institucional de la misma.

Además de actuar nacionalmente, el INESC viene interviniendo en espacios públicos internacional de presión para la democratización de las instituciones de gobernabilidad global, así como en los espacios regionales, buscando la ampliación y el reconocimiento pleno de los derechos humanos.

Visite: www.inesc.org.br



FORD FOUNDATION

FUNDAÇÃO
HEINRICH
ROLL

